

Justicia ordenada, justicia ignorada

Señor Director:

Este mes se cumple un año desde que la Corte de Apelaciones de Valparaíso exigió al Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacer efectiva su propia resolución de demolición sobre el terreno que pertenece a mi familia.

Le recuerdo al Gobierno que en mayo de 2020, un reconocido narcotraficante de la zona mandó a asesinar a mi padre para apropiarse de ese terreno y levantar allí un asentamiento irregular junto a otros negocios ilícitos. Hoy ese criminal cumple una larga condena, pero el terreno sigue ocupado, mientras el Ejecutivo continúa sin cumplir la orden judicial.

Han pasado cinco años marcados por una cadena interminable de promesas incumplidas por parte de ministros, subsecretarios, gobernadores y consejeros regionales. Promesas que debían permitirnos recuperar lo que es nuestro y, con ello, algo más profundo: la confianza de quienes habitamos este país en las instituciones del Estado.

Cumplir con la orden judicial no es solo hacer justicia: una obligación legal y una señal urgente de que el crimen organizado no se tolera, no se normaliza, no se instala.

Ya no caben más excusas. Todo indica que este gobierno ha decidido no cumplir con su deber, creyendo que así evita un problema político, cuando en realidad ha entregado una señal de impunidad frente al narcotráfico y ha sembrado desesperanza entre los ciudadanos.

VALENTINA CORREA U.